

MIÉRCOLES 25 JUNIO

1852.

SE SUSCRIBE

En Madrid en las oficinas de El Diario Español, calle del Carmen, núm. 32, y en las librerías de Monier, Carrera de San Jerónimo, Cuesta, calle Mayor, Villa, plaza de Sto. Domingo, y Oliveros, calle de la Concepción Gerónima, núm. 13.

PRECIO DE SUSCRICION.

Un mes. 12 rs.
Tres meses. 36

EL DIARIO ESPAÑOL,

POLITICO Y LITERARIO.

MIÉRCOLES 25 JUNIO

1852.

SE SUSCRIBE

en provincias en las principales librerías, y en las administraciones de correos y por medio de librerías, francesas de particular orden del administrador de El Diario Español.

PRECIO DE SUSCRICION.

Provincias. Un mes. 120 rs.
Estranjero. Un mes. 60
Ultramar. Un mes. 120



Para muchas personas debe haber sido objeto de detenido examen la traducción, que hemos publicado el día 15 de este mes, del informe presentado a la comisión de hacienda del senado de Washington, por el secretario del tesoro, Mr. Corwin. Concebiremos toda la importancia que para nosotros encierra aquel documento, y las causas del esmero con que ha sido redactado y razonado por Mr. Corwin, en el sentido de utilidad para su país, solo con tener presente que el comercio de importación y exportación de la isla de Cuba con los Estados Unidos directamente, y sin tomar en cuenta el comercio de transporte entre Europa y aquella isla, equivale a mas de una cuarta parte del total general de la importación y la exportación de Cuba, y que la navegación de los Estados Unidos representa en las tablas del mismo comercio la mitad de los barcos y de las toneladas que en él se ocupan. Hay, por tanto, sobrados motivos para que en España procuremos tratar esta cuestión bajo el aspecto de propia conveniencia; examinando las dos actas del congreso de los Estados Unidos de 15 de julio de 1832 y de 30 de junio de 1834, y las razones en que el secretario de hacienda norteamericano funda su proyecto de moderar y abolir algunas disposiciones de una y otra.

De la ley de 1832 nada tenemos que decir por lo que pueda afectar al comercio respectivo de las dos naciones. Está basada en los principios generales de retorsion económica, que presiden hoy en los aranceles para el tráfico exterior de todos o casi todos los países; y el mismo Mr. Corwin no considera nueva a los intereses comerciales del suyo la existencia de aquella ley. Por ella se determina que todo barco español, procedente directa o indirectamente de las colonias de España, pague en los puertos de los Estados Unidos los mismos derechos de tonelada que se exijan a los barcos norteamericanos en el puerto colonial de España, de donde dicho barco español haya salido; y autoriza también al presidente de los Estados Unidos para que suba o baje los derechos de tonelada sobre dichos barcos españoles procedentes de nuestros puertos coloniales, según los aumente o disminuya en los mismos puertos la autoridad española. Nada mas equitativo.

Pero con ninguna de esas razones de justa represalia, que suelen dejar en buen lugar la sana intención de las legislaturas y los gobiernos al decretar medidas protectoras del comercio exterior, se intentaría defender la ley de julio de 1834. No queremos negar a la representación de los Estados Unidos en aquel año esa discreta liberalidad, que es casi siempre consultora necesaria para la mas acertada sanción de actos que pueden herir al interés material, y aun al sentimiento nacional de otros pueblos; mas es lo cierto que nadie ha encontrado hasta ahora en la legislación económica otro ejemplo de igual carácter que el que tiene cierto derecho de parentesco y consanguinidad con esta ley anglo-americana: queremos decir el acta de navegación inglesa, sujeta por la envidia y por una ambición inmoderada de poder marítimo, sin contar con el daño que los celos del continente podían inferir a la Gran Bretaña, aislándola en su propio monopolio. Debemos, sin embargo, recordar que la ciencia de la

riqueza de las naciones apenas había dado aun, cuando la Inglaterra adoptó aquella medida, sus primeros pasos en Europa, y que la ley anglo-americana fué hecha a mediados del siglo diez y nueve. El acta de 1834 ordena que los barcos españoles que vayan a los Estados Unidos, procedentes de las islas de Cuba y Puerto Rico, paguen, además de los derechos ordinarios de tonelada que adeuda en la Unión la bandera extranjera, un derecho de tonelada igual al derecho diferencial que se habría exigido a los cargamentos de dichos barcos, si los mismos cargamentos hubiesen sido exportados del puerto de la Habana en bandera anglo-americana. Dispone además que ningún barco español salga de los Estados Unidos con destino directo o indirecto a cualquiera de dichas islas, sin pagar un derecho de tonelada igual al derecho diferencial que se exigiria al cargamento si fuese importado en la Habana en bandera anglo-americana. Y como si esta exacción no bastase para escluidir a la navegación española de los puertos de los Estados Unidos, dispone también la ley que ningún barco español, salga de los Estados Unidos con cualquier destino, excepto el de las colonias de España, sin dar antes una fianza por el duplo del valor del barco y del cargamento, cuya fianza responderá de que el barco no ha de tocar en aquellas colonias.

Sobrada razón teníamos para asimilar esta medida a lo que hay de mas repugnante en los anales de la legislación de aduanas. Las causas que le dieron ser, son quizá de fecha mas remota que la que le designa Mr. Corwin. Los Estados Unidos, fiados en su privilegiada situación geográfica, en la estructura peculiar de sus costas y en el espíritu emprendedor que siempre ha dominado a su pueblo, aspiraron desde el origen de su independencia a una marina mercante superior a la de cualquiera potencia comercial, inclusa la misma Inglaterra. Sus oradores y publicistas autorizaban de tal modo esta ambición nacional, quizá no mal fundada, que desde principios de este siglo, el pueblo norteamericano considera como patrimonio privativo suyo el comercio de los mares y golfos del Nuevo Mundo, y se cree providencialmente destinado a recoger indivisa la herencia que del dominio del resto de las mareas ha de dejarle en poco tiempo su progenitor la Inglaterra. En los estados del Norte, que poseen casi toda la navegación exterior, ha sido siempre, mas vehementemente esta aspiración, por lo mismo que la conciencia de una gran realidad de barcos y toneladas y una combinación de intereses seccionales mas o menos bien calculada, justificaban sus esperanzas de prosperidad y grandeza navales. Ya en 1819, cuando España, al ceder a los Estados Unidos su territorio de las Floridas, se reservó el derecho de comerciar libremente con su bandera en los puertos meridionales de la Unión por espacio de doce años, los estados del Norte no llevaron a bien esta cláusula del tratado; mientras que algunos del Sur, que se hallaban bien y baratamente servidos por la navegación española, hubieran querido que el tratado concediese a esta una perpetua libertad en sus puertos. La experiencia de los doce años bastó para evidenciar que los especuladores, los traficantes y los marineros españo-

les no carecían de vigor e inteligencia para adelantar sus intereses, y pronosticó además la extensión probable de un futuro desarrollo en mejores días, cuando en tan azarosos para la nación no habían sacado mal partido de su actividad en los puertos de las Floridas.

Hay, quizá, tanta precisión y verdad histórica en los motivos a que atribuimos el clamor del comercio marítimo de los Estados Unidos contra la libertad de la navegación española en los puertos de la Unión, como en los que Mr. Corwin cree sugirieron a la legislatura federal de 1834 la ley de 30 de junio de aquel año.

La experiencia ha demostrado ya, según Mr. Corwin, que los Estados Unidos encontraron en los efectos de esta misma ley, el desengaño de su error. Si bien no han padecido, por consecuencia de ella los intereses de los navieros del Norte, se resintió gravemente de su aplicación el interés del comercio nacional, paralizando la exportación para las Antillas españolas de mercancías europeas en depósito, y animando a la delos productos anglo-americanos. Pero no solo de este modo sufrieron los Estados Unidos la compensación que casi siempre sigue al desacierto la navegación española, virtualmente escluida de los puertos de la Unión; buscó en otras naciones de Europa los fletes y los mercados que los Estados Unidos le negaban. Solo bajo este punto de vista y el de la mayor o menor conveniencia que pueda resultar de tal situación para los intereses comerciales y políticos de España, debemos considerar ahora los efectos de la ley americana.

Por lo que toca a los intereses comunes de la navegación y del comercio de España, no tendrían algunos por obra facil determinar con acierto, si conviene mas al comercio español aprovechar en los mercados de Europa, los precios originales de los países productores y los fletes de la larga travesía del Atlántico, que tener libertad para comprar en los Estados Unidos las mismas mercancías, con un recargo de flete, depósito, y comisión norteamericana, siempre que cualquiera oscilación de los mercados de Cuba y Puerto Rico puedan brindar al especulador una ganancia eventual, ahorrando el tiempo y las dilaciones que supone un pedidó a larga distancia. Nosotros, sin embargo, no dudamos admitir como única autoridad en la cuestión, tratándose de productos extranjeros, el voto del comercio, que está por la libertad de comprar en donde quiera que los precios, ya sea por la proximidad o la baratura, ofrecen mayor ganancia en el mercado nacional. Considerando el grado de inteligencia que ha llegado a adquirir nuestro comercio marítimo, y la competencia que hace desde algunos años a los fletes extranjeros, seria un deslirio el sospechar que nuestros barcos se emplearían en transportar desde los Estados Unidos a nuestras Antillas otros productos de Europa que los que hiciesen necesarios la demanda casual de alguna vicisitud repentina en el consumo de aquellas provincias. La costumbre adquirida por los comerciantes españoles en Inglaterra, Francia, Alemania y el Mediterráneo, escluyen toda posibilidad de que, bajo una tarifa diferencial de mercancías y tonelaje como la que hoy rige, suplante a nuestra bandera en el transporte de los productos de aquellas naciones a nuestras provincias de Ultramar, la bandera

norteamericana ni otra alguna. Consideramos, pues, en este sentido, tan perjudicial a los intereses del comercio español la ley norteamericana de 1834, como a los intereses comerciales de la misma nación que la estableció para favorecerlos. Los Estados Unidos deben abrir muy pronto a los productos de España un mercado inmenso. Nuestros plomos, nuestros vinos, las frutas secas de las provincias del Mediodía, el oro, los aceites refinados, y otras mercancías españolas de considerable valor, encuentran allí, de pocos años a esta parte, quizá su principal consumo; y no está lejano el día en que Castilla y Aragón, todo el corazón de España, y la parte interior de las provincias del litoral podrán abastecer al mercado americano de sus preciosos caldos y demás productos naturales, una vez abaratado su transporte de tierra por las vías que están ya en construcción y las que se proyectan. Un celo entendido y previsor debería inducirnos a facilitar desde ahora los medios de llevar en nuestros propios barcos al mercado de América esos productos, cuyo cambio ha de animar y enriquecer a la mayor parte de nuestras provincias. Si se deja subsistir el impuesto actual y los vejámenes que pesan sobre nuestra bandera en los puertos de los Estados Unidos, será inútil esperar que la navegación española transporte sus propias mercancías a aquel mercado. No solo no pueden ir directamente a los Estados Unidos nuestros barcos con cargamentos o en lastre, sino que los que van a las islas de Cuba y Puerto Rico, o cualquier otro punto de América con cargamento incompleto, no pueden llevarlo con artículos de consumo, norteamericanos, ni aprovechar los fletes de retorno que para España o cualquier otro país puedan darles los Estados Unidos.

Tanto como bajo el aspecto puramente comercial, nos importa contemplar este asunto bajo el aspecto político de nuestro prestigio y entidad nacionales en América. Pero no queremos pasar hoy demasiado los límites de un artículo. Volveremos otro día a exponer las ideas que nos sugirió la lectura del informe de Mr. Corwin, y de sacar del estado de mero expediente pro forma la negociación por tantos años sostenida con el gobierno anglo-americano sobre la abolición de las cláusulas irritantes del acta de 1834. No culpamos a la administración actual por el mal estado de esta cuestión. El mal viene de mas lejos que su subida al poder, y solo se podrá estirpar reemplazando con medios hábiles los simples e ineficaces paliativos empleados hasta el día.

A continuación insertamos un remitido que se nos ha dirigido en contestación al artículo publicado por el Orden en su número del domingo sobre la cuestión de fueros de las provincias Vascongadas. Su autor, que es el mismo del que dias atrás apareció en nuestras columnas sobre el mismo asunto, no desmiente en su nuevo escrito el aplomo, la moderación y la lógica que resallan en el anterior.

Por nuestra parte nada tenemos que añadir a lo que en los dos artículos que llevamos dedicados al examen de esta importante materia hemos manifestado.

—Es según, contestó Carlos. Si me condenan sin oírme, puede ser malo.

—¿Quieres que te proponga un medio para salir bien del paso?

—Dos medios valen mas que uno. Decid.

—Eres joven, diestro y bien formado. Harías un gran soldado. Pide que te admitan tu, enganche voluntario. Vosotros los sicilianos considerais como un privilegio no estar sujetos a quintas; por el contrario, es una verdadera desgracia; poréis infinitos lances de hacer fortuna por el lotto de la existencia. Aquí adonde me ves, si ni pasión por la guerra, no me hubiera retenido siempre bajo las banderas, hubiera tenido mil veces ocasión de casarme con viudas muy ricas acaudadas con mi uniforme. ¡Y luego reborrerías el país, tendrías aventuras, verías a Nápoles!

—¡Nápoles! exclamó el gendarme. ¿Qué ciudad! ¡qué multitud de calles! ¡Che pompa! ¡che lusso! Por la noche veinte mil luces sin mucha saltan de los muros por pequeños agujeros, se inundan la ciudad de una claridad tan brillante como la del sol. Los carrujes se cruzan, y las tiendas iluminadas ostentan sus tesoros a los deslumbrados ojos de los transeúntes. ¡Che pompa! ¡che lusso!

—¿Qué pompa! ¡qué lujo! repitió Carlos abriendo la boca.

—¿Y sabes tú, repuso el sargento, que todo es para el militar en Nápoles? El uniforme de fino paño azul, los galones de plata, los cordones del chaco son de un efecto tal, que puede decirse aquí entre nosotros: el ciudadano con su vestido de etiqueta se eclipsa al lado del soldado, y no brilla ni mas ni menos que una bujía en la mitad del día. Con que enganchate, joven.

—Lo deso ya con todo mi corazón, contestó Carlos; pero, ¡ay! que mi cualidad de siciliano es un obstáculo.

—No insuperable. Tienes buenas notas. Te se ha dejado ejercer las funciones de correo; así te recibirán entre los enganchados voluntarios, si manifestas celo.

Dos sendas se presentaron a la entrada de la ciudad destruida de Taormina.

He aquí el

REMITIDO.

«No hemos discutido los fueros de las provincias Vascongadas y Navarra», dice el Orden del domingo en contestación a mi remitido del día 16; y si al fin de la España. Por mi parte tampoco los he discutido; no he hecho otra cosa que contestar a la materia con que el diario semi-oficial expresaba el deseo de un arreglo. En mi contestación no ha habido ni acritud, ni pasión, ni intolerancia: el Orden fué agresivo en su artículo del 10; yo contesté como corresponde a todo el que escribe para el público: está en la verdad. Yo no he querido que la discusión se agite en el

«Esto sentido, paso a hacermelo cargo de los párrafos que en el artículo del Orden del domingo tienen relación con la polémica que con el mismo sustento. Después de divagar mas o menos, después de algunos trozos, pintorescos unos, incomprensibles otros, y que, en nuestro entender, estaban de mas donde el articulista los coloca, dice nuestro adversario lo siguiente: «El amor de sus hijos (habla de los de las provincias Vascongadas) no se borra con la ausencia; y luego prosigue: «Todo ello se comprende perfectamente; pero esa entidad que nos interesa no existe aislada en el mundo; es miembro de una gran nación, y tiene con ella su participación; su dependencia y sus necesarias relaciones, derechos y deberes.»

Convenio en lo que asienta el Orden. Sé que el país vascongado tiene derechos y deberes respecto a España, la gran nación, de la cual es miembro; por eso el país vascongado, que ha cumplido, ejemplo y ejemplo, fielmente sus deberes para con ella, debe recibir el mar y reclama asimismo del gobierno de la nación sus derechos. «Yo no niego que el país vascongado, si Podría decirnos el Orden, cuánto el país vascongado ha faltado a los deberes que le imponen sus pactos con Castilla? (El articulo del domingo)

Le deslucimos a que nos señale la época. Luego prosigue el citado periódico ocupándose de mi humilde persona en estos términos: «El artículo de «Salida nos ha parecido de un corazón rombo de «Ororella», mas que de una cabeza dada a la reflexión, y la del Vascongado, que en un artículo de El Diario Español, reproducido por la España (y por el Clarín) y por la Esperanza, debió haber añadido, aconsejando «cándidamente a las demas provincias del reino que se abstengan de las que se llamaron exentas, y las adopciones por modelos de los que se llaman exentos.»

No sé en verdad, de qué está tomado mi corazón, ni me ocupo de tal cosa; lo que si puedo asegurar es, que está poseído de amor-patria; que sus sentimientos son nobles; los deseos que abraza, encaminados al bien de esto respondy; y supongo que el Orden me hará la justicia de creerlo. Tampoco puedo adivinar en qué parte de mi artículo ha podido encontrar el periódico semi-oficial el que mi cabeza está o no dada a la reflexión, pues yo creo que en todo él no he hecho otra cosa que sentar razones de las cuales haría mejor el Orden contestar, que no al ocuparse en analizar mis facultades morales.

Yo creo, por otra parte, que si a las doce del día me dijese cualquiera, aunque este cualquiera fuese el Orden (que escribe en griego), que era media noche, no necesitaría reflexionar ni un segundo tan siquiera para contestarle que padecía un error lamentable. Mi cándidez llega hasta ese extremo.

Ni yo he aconsejado cándidamente a las demas provincias del reino que se abstengan de las exentas, ni nadie que lea mi remitido deducirá de él semejante cosa. Me he limitado a contestar con razones (que

Señores militares, dijo Carlos, se me ha ocurrido un escrúpulo. Se puede recibir una bala en alguna batalla. Decididamente me quedo en Sicilia. En cuanto al señor comisario, está desgraciadamente prevenido contra mí por mi enemigo; así no lo veré. Ahí poned el camino para ir a su casa; yo me voy por el otro y es deseo un buen viaje.

Carlos desahogó dos golpes tan fuertes a cada uno de los gendarmes, que los hizo tambalear, y escapó como una liebre. El viejo sargento le gritó que se detuviera si no quería morir de un tiro de terreta; pero antes que pudiese montar la pistola de bolsillo, se había metido Carlos por una callejuela. El gendarme, sable en mano, corrió en persecución de su hombre tan luego como pudo. A los diez pasos llegó a un terreno cubierto de ruinas, y cortado por una multitud de sendas. Una niña de unos cuatro años acurrucada a su lado, se preguntó qué camino había tomado un hombre con chaqueta y el cinturón de rojo de los artilleros. La niña, que conoció el acento de la tierra firme, no contestó y echó a correr enseñando la lengua al extranjero. Sobre un pedazo de mar, que mol se hallaba apaciblemente, sentado un monge de un minico contemplando los reflejos dorados del crepusculo sobre la nieve del Etna.

—Padre mío, le dijo el gendarme, ¿no ha atravesado por este terreno un criminal prófugo? El veneno de rabie ronge, sin volver la vista, movió las alas de su sombrero y siguió murmurando un pater noster.

Al salir del terreno cubierto de ruinas, el gendarme encontró a su sargento que también corría como él. Después de haber dado algunos pasos los dos juntos, fueron detenidos por un bosque de aloes, cuyas grandes hojas presentaban sus puntas afiladas como la de un puñal. En tanto que buscaban un medio de pasar, este bultar, vieron como a dos tiros de fusil, sobre un pieco muy elevado, a Carlos que saltaba como un gato por entre las rocas y parvas salvajes. El sargento volvió a guardar su terreta, el gendarme se volvió a su sable, y tomaron otra vez el camino de Taormina, troncando contra los dominicos, las hojas de aloes y la Sicilia entera.

(Se continuará.)

FOLLETIN.

EL MEZZO MATTO.

RECUERDOS DE LA VIDA SICILIANA.

II.

(CONTINUACION.)

Carlos se retiró confuso por el papel tan triste que acababa de hacer, y desesperado por no haber manifestado vigor y presencia de ánimo, se tendió en la arena y permaneció una hora sin movimiento pensando en su falta. Entonces se le ocurrió la idea de que, no saliendo el tal Francisco de Taormina hasta el amanecer, se podía, andando toda la noche, llegar a tiempo de encontrarlo en el camino de Francavilla, quitarle la correspondencia de grado o por fuerza, y hacer por última vez el servicio de correo. Sin comunicar con nadie su proyecto, Carlos echó un pienso a su mulo, y partió para la sierra. Conocía perfectamente todas las trochas, y sin fatigarse mucho llegó antes de salir el sol al punto por donde el correo debía pasar indefectiblemente para ir a Francavilla.

D. Francisco, llevando del diestro a su mulo cargado con la correspondencia, dividió en un mal paso a Carlos vestido de correo como él. Adivinó el peligro de este encuentro, y quiso tantear el terreno como buen diplomático. «Buenos días, D. Carlos, dijo con mucho candor. Os habeis levantado muy de mañana, y debo yo ser el primero que os desee un día feliz.

—No érais tan atento ayer, contestó Carlos. Vuestra lengua se ha mejorado durante la noche, a lo que parece. Puesto que os encuentro con humor de darne audiencia, tened la bondad de mostrarme la orden que os autoriza a tomar mi plaza.

—¿Creeis, por ventura, replicó el napolitano, que usurpo funciones que no me corresponden?

—No sé; pero veamos la orden.

—Sabed que el mozo de oficio de la dirección de

correos de Mesina es padrino del hijo de un primo mio. Un día me dijo: «Francisco, deberías entrar en nuestra administración. Yo no tenía gran deseo; pero se cansa uno de vivir en los cafés, y he tomado este insignificante destino mientras me dan otra cosa mejor.

—Sois un hombre de calidad, rico, poderoso, muy bien emparentado, admirable y superior al resto de los mortales, como todos los napolitanos; pero veamos vuestro título.

—Lo he dado en Taormina.

—Eso os va a causar algun disgusto. En tanto que yo no haya recibido la orden de mi destitución, puedo y debo considerarme como tal empleado. Vais a entregarme si gustais las balijas y la correspondencia.

—Nadie nos corre, repuso el napolitano. Hablemos un momento; y creo que nos entenderemos como buenos amigos y compatriotas. Yo quiero mucho a los sicilianos.

—Si, interrumpió Carlos; por la mañana y en los caminos solitarios: en la ciudad es otra cosa. Yo no soy vuestro amigo. En cuanto a vuestro compatriota, lo habeis querido decir por complaceros, o se geografía; pero pensaba que nosotros habíamos uno de esos pedazos de tierra rodeados de agua que se llaman islas, si mi memoria no me engaña.

—Vuestra memoria, contestó el napolitano, es igual a vuestro talento. También he oido decir que los hombres habian inventado máquinas de madera que bogaban sobre el mar, y que servian para pasar desde el continente a estos pedazos de tierra rodeados de agua. Creo que estos se llaman barcos.

—Has retenido bien el nombre de esas máquinas malditas. Ahora que has desplegado tanta instrucción como urbanidad, entregame mi correspondencia.

—Los hombres han inventado tambien, añadió el napolitano, un utensilio de hierro que se llama cuchillo, y sirve para defenderse de los ladrones en los caminos.

Francisco sacó, en efecto, un cuchillo; pero antes que hubiera hecho a lozan de acometer, Carlos lo

no han sido rebatidas por el *Orden* a las proposiciones acaudaladas y falsas suposiciones que estampaba en su artículo del 10.

Yo ni hablo ni escribo en griego: si el lenguaje castellano que uso en mis escritos no es muy castizo, ni su estilo ni mas puro y elegante, tiene, a lo que creo, la ventaja de ser *inteligible*. Por eso, los que hayan leído mi *remedio* verán que lo que gratuitamente supone el *Orden* no es cierto.

Luego prosigue el citado periódico:
«La geografía no se manda, ni la historia se deshace, ni los hábitos se improvisan.»

Hé aquí una *candida*, que por grande que sea la mia, se queda muy atrás en su comparación.

Si la historia no se deshace, ¿a qué viene el *Orden* a desbaratar la vascongada?

Si los hábitos no se improvisan, ¿quién le mete al *Orden* a querer cambiar los de los vascongados, tan repentinamente como se cambia la decoración de un teatro?

¿Somos los vascongados los que hemos predicado una cruzada para que los que no lo son se identifiquen con nosotros, o son el *Orden* y los suyos los que un día y otro día aturden nuestros oídos con la conveniencia, con la imperiosa necesidad de que así-mismos a su geografía nuestra geografía que no se manda; a su historia nuestra historia que no se deshace; a sus hábitos nuestros hábitos que no se improvisan?

¿O creerá acaso el *Orden* que nuestra geografía es igual a la del resto de España, que no tenemos historia propia, que nuestros hábitos en nada se diferencian de los suyos?

A bien, a bien, que por mucha dosis de reflexión que quepa en la cabeza del articulista del *Orden*, no lo dá a conocer ni en este párrafo, ni en otros muchos; y por cierto que yo no temeríamos pecar de difusos, solo haríamos ver en pocas palabras, copiando literalmente las que estampó en el número del día 10, y comparándolas con las que ha escrito en el del día 20.

Después de otro párrafo en que, echándole de profeta, predice a su manera del modo con que nos asiremos los vascongados a un cable para salvarnos, yo no sé de qué género de cataclismo, añade, con sana intención sin duda:

«Pero no entendemos consentir privilegios ni privilegios, que forzosamente habrían de redundar en recargo de los co-asociados.»

Si la posición en que estoy colocado en esta polémica, en mal hora provocada por el *Orden*, fuese de igual condición que la que este periódico ocupa, yo daría satisfacción cumplida a lo subrayado: desgraciadamente no es así, y por eso no lo verifico.

Si las circunstancias cambian algún día, no tema el *Orden* que guarde el silencio que hoy me aconseja la prudencia.

El resto de lo que contiene el diario semi-oficial, se reduce a protestar de las tendencias que cree se atribuyeron a su artículo del 10, de crear dudas, de alarmar costumbres queridas (1).

Luego se ocupa de generalidades que a nada conducen, que nada prueban en cuestiones de esta especie, de frases campanudas, de algunas contradicciones, prueba de incoherencia en las ideas, y finalmente, de movimientos y marchas rapidísimas de la especie humana, que ha repetido hasta la saciedad, y a cuyo espectáculo demuestra el bueno del *Orden* singular predilección. Todo ello óptimo fruto ó producto, si no de un corazón tomado de Orotunda, al menos de una cabeza muy dada a la reflexión.

No creo sea esta la manera de discutir. Solo aquellos que se encuentran faltos de razones que alegar en pró de sus doctrinas, acuden a medios semejantes para procurar sostenerlas.

Considerando, pues, vencido al *Orden* en lucha de buena ley, y teniendo presente además que ha desaparecido, según noticias, la causa ó motivo que sirvió de punto de partida a la polémica, yo por mi parte suelto la pluma y la doy por terminada. El país juzgará de parte de quién ha estado la razón. Para dar fin a este mi último *remedio*, solo me resta protestar contra las gratuitas aseveraciones del *Orden*, que al retirarse vencido del campo de batalla, suelta un dardo muy inofensivo por cierto.

Tenga entendido el diario semi-oficial, que ni monopoliza el patriotismo, como lo han hecho otros sin duda, ni trato de arrogarme dictadura de ninguna especie.

UN VASCONGADO.

Madrid 21 de junio de 1852.

El Comercio del día 19 publica su cuarto artículo sobre Reformas políticas, que dice así:

«Variar completamente el orden establecido para la declaración del derecho electoral, es otra de las reformas que hemos propuesto para mejorar la legislación vigente.»

El sistema antiguo hacia punto menos que soberanas a las diputaciones provinciales respecto a la formación de las listas electorales, por lo cual sucedía que el partido político que llegaba a dominar en aquellos cuerpos, podía contar con la casi seguridad de un triunfo completo en las urnas.

Por el sistema actual la soberanía de las diputaciones ha pasado con alguna otra restricción que suelto ser ineficaz, a los gobernadores de provincia, y el gobierno tiene por tanto en su mano los medios de ejercer una grandísima influencia en la formación de las listas, que es precisamente la base principal de las elecciones.

Si se nos oblige a optar entre uno y otro sistema, entre la omnipotencia de los partidos y la omnipotencia del gobierno, optáramos decididamente por lo último, porque tenemos menos a los abusos de una autoridad, que al cabo es responsable ante la ley de sus actos, y necesita justificar ante ella de algún modo sus disposiciones, que a los desmanes de una corporación popular erigida en instrumento de un partido, para la que no hay en este caso mas ley que el interés de la parcialidad política a que corresponde.

Pero como no tenemos necesidad de optar ahora por uno de los dos sistemas, parecemos lo mejor, después de haber meditado mucho sobre ellos, dejar á entrambos iguales quedándonos sin ninguno.

Efectivamente, todo lo que sea encomendar a una autoridad, a una corporación cualquiera, la tarea de formar las listas electorales, es dejar campo abierto para que se formen—y no decimos precisamente que así suceda—a gusto del gobierno ó a gusto de un partido. Por mucho que flemos en la probidad política de los hombres, no se nos negará que ciega mucho el interés de las doctrinas que se defienden, y que quien puede, al formar las listas, asegura en las urnas el triunfo de sus doctrinas quitando votos a los contrarios y dándoselos a los amigos, está muy dispuesto a dejarse arrastrar por las tentaciones de semejante interés.

En la formación de las listas deben intervenir todos los partidos, todos los electores, todos los que quieran hacer uso del derecho electoral. La ley debe conceder, en principio, este derecho a cuantos reúnan las circunstancias que ella determina; pero no tratándose como no se trata de un derecho obli-

gatorio, porque los derechos son siempre voluntarios, solamente debe ser elector el que quiera serlo, el que no quiera renunciar al ejercicio del derecho mismo. Vamos a ver si acertamos a explicar nuestro pensamiento.

Nosotros impondríamos a los gobernadores de provincia la obligación de publicar todos los años por suplemento al *Boletín oficial*, haciendo una numerosa tirada de ejemplares, los repartos de contribuciones directas de los pueblos, en los cuales deberían distinguirse los contribuyentes vecinos de los forasteros, apareciendo unos y otros correlativamente numerados.

Llegado el caso de unas elecciones, todos los contribuyentes que según los repartos últimamente publicados pagasen la cantidad necesaria para ser elector, podrían pedir que se les declarase tales, y que se declarase del mismo modo a los demás contribuyentes que designaran, sin necesidad de presentar otra prueba que la cita del número ó números con que los reclamantes estuviesen anotados en los repartos.

Igual solicitud podrían presentar los que, no figurando en ellos por omisión inadvertida ó por cualquiera otra causa, contribuyesen sin embargo con la cantidad suficiente dentro ó fuera de la provincia; pero los que se hallasen en este caso deberían acompañar a sus reclamaciones los documentos correspondientes para comprobarlas.

El gobernador haría publicar por un plazo dado, listas nominales de las reclamaciones que se le presentasen, con expresión de las personas que las suscribiesen, y de los fundamentos de cada reclamación, y dentro de dicho plazo se admitirían las que pudiesen hacerse contra la declaración del derecho electoral en favor de personas determinadas.

Concluido el plazo, el gobernador, oyendo al consejo provincial, resolvería sobre los casos más ó menos dudosos, que serían solamente los de las reclamaciones que hubiesen hallado oposición, ó los de aquellas otras que se presentasen documentadas por no aparecer los reclamantes en los repartos de contribuciones; pero nosotros haríamos declarar expresamente que todo el que habiendo acudido en tiempo oportuno a las listas anotadas en los mismos repartos con cantidad bastante para completar el censo y no hubiese encontrado oposición, era de hecho elector, y no podía privarse de serlo bajo ningún pretexto. De las resoluciones del gobernador podría apelarse, como ahora sucede, a la audiencia territorial del distrito.

También estableceríamos en la ley el principio de que los electores presuntos pudiesen hacer sus reclamaciones, lo mismo con relación al pueblo de su residencia, que con respecto a cualesquiera otros de la provincia.

Adoptado este sistema se evitarían muchos de los abusos que hemos tocado hasta ahora. A cada partido político ejercería una influencia directa en la formación de las listas electorales, y no dependería del capricho de una autoridad ó de una corporación cualquiera que hubiese mayor ó menor número de electores en favor ó en contra de tales ó cuales doctrinas, sino de la mayor ó menor diligencia de los partidos para formular sus reclamaciones en tiempo oportuno. El examen de las que se presentasen, sabiéndose como se sabrían los nombres de las personas que las hacían, y por consiguiente el color político de ellas, sería empresa fácil para los que tuviesen interés en oponerse, porque podrían contraer sus tareas investigadoras a las reclamaciones que les fuesen adversas, en lugar de tener que estudiar como ahora una larga lista, cuyos defectos, ó a mayor parte de ellos, pasan desapercibidos, porque no es fácil descubrirlos sin hacer de antemano una estadística individual de los partidos de cada pueblo, cosa que por otra parte, tiene algo de repugnante, además de ser casi siempre completamente imposible.

El derecho de reclamar que concede la legislación actual, viene á ser por esto mismo punto menos que inútil, y así se explica que las listas, buenas ó malas, pasan en todas partes, con ligeras rectificaciones, según las formas las autoridades; y que estas ejercen en realidad un poder casi omnínimo para hacer que las elecciones sean una verdad, ó para que den al contrario por resultado el falseamiento de la opinión pública.

Con nuestro sistema no desaparecerían todos los abusos, porque esto es imposible; pero se harían mas difíciles, podrían contar los partidos con garantías mas eficaces, y habría diques contra la arbitrariedad y contra los desmanes del espíritu de bandería.

Cartas de Londres que hemos recibido anoche, nos anuncian una noticia que celebráramos ver confirmada. Parece que entre nuestro gobierno y el de la Gran-Bretaña se está arreglando un convenio postal. Es inútil indicar las grandes ventajas que resultarían en hacer mas fáciles y rápidas las comunicaciones entre ambos países.

También nos dicen de Londres que SS. AA. los duques de Montpensier habían salido de Claremont, trasladándose a Richmond. SS. AA. habían sido convidados nuevamente a comer por la reina Victoria. Su permanencia en Inglaterra parece será hasta fines de julio, en cuya época, como ya hemos anunciado, saldrán para Cádiz. Para entonces se verificará en esta ciudad la consagración del obispo de Guadix, Sr. de Arbolí, de quien SS. AA. se han dignado ser padrinos.

Los periódicos extranjeros que hemos recibido anoche nos dan algunas noticias relativas a la expedición del general Flores en el Ecuador. El 1.º de mayo no había habido ningún ataque, pero se preparaba a empezar las hostilidades. El gobierno por su parte hacía grandes preparativos de defensa. Las cartas de Guayaquil de la misma fecha dicen, que un buque inglés y otro americano habían ofrecido sus servicios al gobierno del Ecuador; para protegerlo contra el general Flores.

Por lo demás, esta república se halla en un estado bastante deplorable, y probablemente se verá obligada también a sostener una guerra con el Perú, pues el presidente ha declarado en una proclama que después que concluya con el general Flores, irá a tomar venganza de los peruanos.

La Gaceta inserta ayer un real decreto concediendo la gran cruz de Carlos III a D. Ramón de La-Rocha, capitán general de Cataluña.

Leemos en la España:

«Nos apresuramos a poner en conocimiento de nuestros lectores un nuevo rasgo del magnánimo corazón de nuestra soberana.

A consecuencia de las desdichadas ocurrencias de Calatayud, algunos de los vecinos y mayores contribuyentes de dicha ciudad elevaron a S. M. una reverente exposición, implorando en favor de los ilustres que se hallaban bajo el severo fallo de la ley, una prueba mas de la inagotable clemencia de que ha dado ya tantas pruebas. S. M., haciendo uso de su regia prerrogativa, se ha servido indultar de la última pena, en el caso de que el consejo de guerra les condene a ella, a todos los reos, exceptuando al jefe de la asonada, D. Francisco Ibarra, que se halla prófugo. Posteriormente, y a instancias de la desconsolada esposa de este último, se acordó también por el celo juez de primera instancia de Calatayud, D. Antonio de Villaragut, que se encuentra incidentalmente en la corte, la reina se ha dignado incluir igualmente al dicho Ibarra en la gracia de indulto, ordenando además que

la sentencia que recaiga en esta causa venga en consulta a la superioridad.»

El inspector general de la guardia civil, en 15 del corriente, participa al ministerio de la gobernación que el bandido Juan Casemiro González, individuo que era de la partida de Zamarra, fué muerto por el destacamento de Alora (Málaga) después de una tenaz resistencia, de la que resultó levemente herido el guardia de primera clase Pedro Bandera; y que al ser reconocido el cadáver del criminal, se le encontró un reloj, una pistola cargada, un cuchillo de media vara, una canana con 28 cartuchos, porción de municiones, una llave de puerta, dos monedas de oro de a 20 rs., dos esquelas anónimas y otros efectos.

Examen de la Prensa.

El Constitucional publica un artículo del señor D. Fermín González Moron, en el cual se propone demostrar que en España no ha habido régimen parlamentario desde 1834, como se cree, sino un sistema peor que el de Felipe II. Comparando el articulista aquellos tiempos con los que corremos, dice: «Parecemos que era entonces mas poderosa la ley, que los fueros de las diversas clases del estado eran mas respetados, que los ayuntamientos eran mas libres, que las persecuciones alcanzaban un número infinitamente menor de personas, que los ciudadanos tenían mayores y mas eficaces garantías contra la arbitrariedad de los gobernantes, que habia menos libertad en la apariencia, mayor libertad en realidad.» Y concluye así:

«¿Cómo, pues, ha de haber régimen parlamentario en España, si la España tiene inculcado en todas sus instituciones y en todos los hábitos burocráticos, no solo este sistema francés, sino la exageración, la caricatura y la parodia de este sistema? ¿Cómo ha de haber verdadero régimen constitucional en la península, régimen que amamos, régimen cuyos verdaderos principios defendemos, régimen por cuya sinceridad práctica abogamos—si no ha habido elecciones libres, imprenta libre—si está todavía por verse un ministerio parlamentario, es decir, formado parlamentariamente? ¿Cómo ha de haber régimen libre, si no ha habido vida municipal, ni vida provincial, salva la época azarosa y turbulenta de las asonadas, si al poder no se ha subido jamás en brazos de la opinión? ¿Cómo ha de haber régimen libre en la patria de Aranda y de Jovellanos, cuando ni se empiezan para llegar a los primeros puestos, aquel digno carácter, aquella alta probidad, aquel patriotismo, aquel valor cívico, sin los cuales no hay ni puede haber hombres públicos? Y al apresurarnos de esta manera, nosotros podemos terminar este artículo con las elocuentes palabras de un eclesiástico escritor: «Nosotros no mentimos, no calumniamos, no hacemos una sátira; nosotros escribimos la historia.»

El *Orden* continúa publicando una serie de artículos sobre la revolución de Italia, contrayéndose hoy al Piemonte.

La España se ocupa de contestar el artículo del *Orden* de ayer sobre los fueros de las provincias Vascongadas, tachando de inoportunos los asertos del *Orden* en esta cuestión, ya se consideren bajo el punto de vista teórico, ya bajo el práctico.

El *Clamor Público*, en su primer artículo, contesta a la España acerca del desestanco de la sal. En otro artículo llama la atención de sus lectores sobre la frecuencia con que se publican en la Gaceta reales decretos concediendo créditos, ya extraordinarios, ya suplementarios. Nuestro colega recuerda las palabras que dijo hace tres años al censurar la ley de contabilidad, y hace una recapitulación por años desde que se promulgó aquella ley.

He aquí como se expresa:

«Para que se aprecien los resultados de la famosa ley de contabilidad en esta parte, vamos a hacer una recapitulación por años de los créditos extraordinarios y suplementarios concedidos desde que se promulgó al tenor del *Boletín oficial* de hacienda, catálogo el mas exacto que se conoce. En alta incluímos los decretados con igualdad de reintegrables, porque no nos consta que haya tenido lugar el reembolso, asi como los que se han cubierto con sobrantes ó ahorros hechos en otros capítulos del presupuesto, por la sencilla razón de que estos últimos deben reputarse como economías y aquellos como nuevos dispendios. Ya que por lo común se piden a los pueblos nuevos sacrificios cuando se aumentan los gastos por cualquier motivo, reporten siquiera el pequeño alivio de los sobrantes, por desgracia muy cortos. Hechas estas explicaciones, y advirtiéndole para la mas completa inteligencia de los lectores, que la ley de contabilidad se espidió en 20 de febrero de 1850, pasamos a formar el resumen en que podremos involuntariamente omitir algun crédito, siendo indudables cuantos abraza:

1850.—Junio.
Real decreto del 14 concediendo al ministro de hacienda para el establecimiento de las administraciones de consumos, un crédito de . . . 940,000
Id. id. del mismo día al ministro de la gobernación para los gastos de las secretarías de los gobiernos de provincias, otro de . . . 169,000
Id. id. al de comercio del 20 para indemnizar al duque de Híjar del terreno cedido para abrir una calle adyacente al congreso, otro de . . . 1,042,494 27
Id. id. del mismo día para el adorno y mueblaje del congreso, otro de . . . 1,359,550
Id. id. al ministro de marina, del día 21, para la construcción de vapores, otro de . . . 20,000,000

Julio.
Id. id. al de comercio, fecha del 10, para la posesión de la industria, otro de . . . 60,000

Agosto.
Id. id. al ministro de la gobernación, fecha del 2, para la compra de dos vapores, otro de . . . 10,000,000
Id. id. al ministro de hacienda, del mismo día, para obras en edificios públicos, otro de . . . 800,433

Septiembre.
Id. id. al de comercio, fecha del 25, para las obras del congreso, otro de . . . 700,000

Octubre.
Id. id. al de hacienda, fecha del 25, para la indemnización del terreno adquirido de la junta de beneficencia de esta corte para el tránsito del edificio del Salitre a la calle de la Yedra, o reinteegrable de . . . 1,022,129

Noviembre.
Id. id. al ministro de la gobernación, fecha del 5, para el personal de proteccion y seguridad pública, de correos y de telegrafos, tres créditos compensables, importantes . . . 1,430,000

Diciembre.	
Id. id. al de marina, fecha del 18, varios suplementos a diversos capitulos compensables . . .	3.307,243 2
Total . . .	40.840,850 14
1851.—Febrero.	
Id. id. al de hacienda, del día 28, para cubrir los quebrantos de giro por traslación de caudales, otro de . . .	11.428,000
Mayo.	
Id. id. al de la guerra, fecha 12, para la construcción de fusiles, otro de . . .	2.520,000
Junio.	
Id. id. al de hacienda, fecha del 18, para la traída de aguas a Madrid, otro reintegrable de . . .	2.000,000
Id. id. al mismo, del día 20, por suplemento a los capitulos 4.º y 8.º de la seccion 6.ª, otro compensable de . . .	1.674,522 31
Julio.	
Id. id. al de la guerra, fecha del 30, para la reedificación del cuartel titulado de Aranda, otro de . . .	822,009
Agosto.	
Id. id. fecha del 3, para el adorno y mueblaje del congreso, otro de . . .	200,000
Octubre.	
Id. id. al de la guerra, fecha del 1.º, para el material del arma de artillería con destino íntegro ó exclusivo al armamento de las fortificaciones litorales de la Península y Ultramar, otro de . . .	5.000,000
Id. id. al de comercio, la misma fecha, para obras de mejora y conservación de los puertos de la Península e islas adyacentes, otro de . . .	1.800,000
Id. id. al de gracia y justicia, la propia fecha, para la reparación de los edificios y mueblaje de las audiencias, otro de . . .	800,000
Id. id. al de la guerra, fecha también del 1.º, para reparación de las fortificaciones y edificios destinados al servicio militar en la plaza de Palma de las Baleares, otro de . . .	365,900
Id. id. al de comercio, del día 18, para el personal de la biblioteca nacional, otro de . . .	58,057 11
Id. id. al de marina, fecha del 21, para el material de los arsenales, otro compensable de . . .	3.717,800
Total . . .	30.351,289 8

1852.—Enero.

Id. id. al ministro de hacienda, en el día 6, para la compra del armamento del cuerpo de carabineros, un crédito de . . . 1.000,000
Real orden del 21 para que se rebajen del capítulo 7.º, seccion 10, del presupuesto del corriente año, y se agreguen al 5.º, art. 6.º de la propia, para sueldos de carabineros . . . 1.316,680

Febrero.
Real decreto del día 27 concediendo al senado para el objeto que se expresa un crédito de . . . 100,000

Marzo.
Id. id. al ministro de marina para suplemento a varios capitulos de su presupuesto un crédito compensable ó que se baja de otros capitulos, su importe . . . 8.349,906 13

Id. id. al de la gobernación, fecha del 8, para las obras del local que ocupa el consejo real, otro de . . . 160,500

Id. id. al de la gobernación, en el día 10, para la adquisición de la casa de Camarasa y su habilitación, otro de . . . 2.329,194

Id. id. al de hacienda, en el 30, para haberes de los aduaneros y refuerzo de las rondas de visita de puertas, otro de . . . 2.345,080

Mayo.
Id. id. al mismo, en el 13, para gratificaciones a las clases de tropa del cuerpo de carabineros y conservación de prendas mayores, remonta, montura y armamento, otro de . . . 800,000

Id. id. al mismo ministro en igual día para los gastos ordinarios y extraordinarios del congreso de diputados, otro de . . . 463,623

Id. id. al mismo, en la propia fecha, para la compra de veintimil arrobas de pólvora con destino a las espedidurias del reino, otro de . . . 1.687,500

Id. id. al mismo, en el día 21, para los gastos extraordinarios de conversión de la deuda pública y confección de títulos y residuos de la del personal, otro de . . . 1.000,000

Id. id. al ministro de la guerra, fecha del 29, con aplicación a varios capitulos de su presupuesto, otro de . . . 9.650,440 8

Junio.
Id. id. al de marina, en el día 7, suplemento a varios capitulos, compensable en lo rebajado en otros . . . 1.638,779 2

Id. id. al de hacienda, fecha del 10, para las rentas vitícolas del segundo semestre del año pasado y presente anualidad, otro de . . . 3.750,000

Id. id. al de hacienda, fecha del 18, para la conducción de aguas a Madrid, otro reintegrable de . . . 3.000,000

Id. id. al de gobernación, fecha del 16, para establecimientos penales, un crédito compensable de . . . 260,000

Total . . . 37.814,702 3

1850 . . . 40.840,850 14
1851 . . . 30.351,289 8
1852 . . . 37.814,702 33

109.103,842 21

Resulta, pues, que desde la promulgación de la ley de contabilidad, es decir, en 29 meses, se ha acordado por gastos extraordinarios y suplemento, la enorme suma que dejamos figurada. De los tres años, el que va corriendo promete ser mas fecundo que los demás en esta clase de economías al revés. ¡Qué cruel desengaño!

El *Heraldo* dedica un extenso artículo a demostrar la escasez de los intereses materiales, y a combatir a sus adversarios, a los que denomina innovadores y envidiosos, probando, apoyado en las doctrinas de Fenelon y de Bossuet, que no existe incompatibilidad alguna entre la cultura intelectual y moral, y la satisfacción de las necesidades físicas, la cual es correlativa del trabajo.

He aquí algunos de sus párrafos:

«¿Cuáles son las fuerzas, cuáles las facultades humanas que conducen a la riqueza, y de cuya aplicación y ejercicio resultan el progreso y la mejora de los intereses materiales? Son la actividad, la economía, el

orden, la buena fe y el amor al trabajo. ¿Y cuáles son las que conducen a la pobreza? La indolencia, la falta de previsión, la prodigalidad, los vicios. Pues bien: en el nuevo orden de cosas que ensalzan los hombres a quienes estamos combatiendo, toda esta distribución de causas y efectos queda enteramente trocada. Lo que antes conducía a la elevación del hombre sobre el nivel de la naturaleza bruta, es ya una señal de degeneración y de anatemá; lo que antes lo envilecía y desvanecía en su frente el sello de su origen divino, es ya un título de gloria y de engrandecimiento.

No se crea que despreciamos ni que calumniamos a la pobreza. Mil veces la hemos visto asociada con dotes eminentes y con grandes virtudes. Pero por lo mismo que la respetamos y simpatizamos de todo nuestro corazón con sus padecimientos, aplaudimos los adelantos del siglo que tan eficazmente contribuyen al alivio de sus males, al ensanche de sus goces, al ennoblecimiento de sus facultades mentales. Por eso queremos escuelas gratuitas que fustren, libertad de comercio que abarate sus consumos, cáminos de hierro que les faciliten los gozos monopolizados ante por la opulencia, compañías de seguros y cajas de ahorros que fectunden sus economías. Promover los intereses materiales es, defender la causa del pobre; es elevarlo al nivel de las clases medias; es proporcionar el medio mas eficaz que se ha inventado hasta ahora, para que desaparezcan las deficiencias artificiales nacidas en tiempos de barbarie, ante el suave calor de una incansable e ilustrada filantropía.

La *Esperanza* se ocupa en rebatir un artículo de la *Actualidad*, periódico de Barcelona, en el cual se proponía demostrar este periódico la gran contradicción que existía entre el art. 3.º de la pastoral del señor obispo de aquella ciudad, y el decreto de las cortes de 24 de junio de 1822, restablecido por otro de 5 de enero de 1857, por el cual se mandaba a los párrocos que celebrasen los matrimonios sin licencia del ordinario, a menos que los feligreses, sean extranjeros, vagos, de agena diócesis, ó intervenga circunstancia especial que haga necesario este permiso.

Parte Oficial.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La reina nuestra señora (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan sin novedad en su importante salud en el real sitio de Aranjuez.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Reales decretos.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el gobernador de la provincia de Sevilla y el juez de primera instancia de su capital, de los cuales resulta que por fallo ejecutorio de la jurisdicción ordinaria se declararon de la pertenencia de D. José Benito Villa, los bienes de la fundación de D. Alonso Lopez de la Vega, destinados al pago de dotes a los parientes del fundador; a vestir cierto número de pobres; a la celebración anual de una fiesta religiosa, y a cubrir algunas cargas de justicia, cuya administración quedo encargada a la sacristanía de Santa Ana; y por esta se sirvieron cuentas a quien correspondiese, que otra de las partidas de data de estas cuentas, aprobadas por la autoridad superior de la provincia, era la de haber entregado el remanente de los productos de dichos bienes, después de cubiertas todas aquellas atenciones, al hospicio de la referida capital, con arreglo a lo dispuesto por real cédula de 3 de setiembre de 1830, que señaló como fondo para su manutención los sobrantes de los de todos los patronatos; y sobre este remanente promovió pleito ordinario en 11 de abril de 1851 D. José Benito Villa, ante el referido juez, pretendiendo que la suma de los aplicados al hospicio desde 1831 debía considerarse como parte de los bienes que se le habían adjudicado, y pidiendo que el administrador de aquel establecimiento fuese condenado a su devolución, de cuya demanda dió conocimiento dicho administrador al mencionado gobernador de la provincia, por que se intimó y formalizó la presente competencia.

Vista la real orden de 25 de marzo de 1846, por la que se declara que el gobierno ejerce por sí mismo y por medio de los jefes políticos, sus delegados, el protectorado; no tan solamente de los establecimientos que pertenecen al estado, a las provincias ó a los pueblos, sino tambien de los intereses colectivos que como el socorro de pobres ó el dote de doncellas, sin entrar en el cuadro de aquellas divisiones políticas, requieren una especial tutela de parte de la administración pública, ya por su importancia, ya por carecer de representante que eficazmente los defiendan:

Considerando que el protectorado a que se refiere esta real orden, encierra necesariamente la facultad de destinar los productos de las fundaciones en lo que estos exceden de lo necesario para cumplir la voluntad del fundador, y el examen y aprobación de las cuentas de la inversión de todos los productos, y no dirigiéndose la demanda de D. José Benito Villa, sino a que se declare ilegítimo el uso hecho de aquel protectorado en el caso presente, dando y aprobando la aplicación que impugna a una parte de las rentas del patronato que se le ha adjudicado mientras existió, es claro que no pudo ni debió dirigirse al juzgado ordinario, que ninguna participación tiene en dicho protectorado, sino a la autoridad donde este reside, ya por la vía gubernativa, ya en su caso por la contenciosa;

Oído el consejo real, vengo en decidir esta competencia en favor de la administración.

Dado en Aranjuez a 9 de junio de 1852.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la gobernación, Manuel Bertran de Lis.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el gobernador de la provincia de Toledo y el juez de primera instancia de Talavera de la Reina, de los cuales resulta que en diciembre de 1849 propuso demanda ante este último el curador del marqués de Aguila-Fuente para que, en atención a hallarse declarado judicialmente que su antecesor habia cumplido con lo dispuesto en la ley de señorios de 26 de agosto de 1837, por lo tocante al suyo de Nava-morcunde y pueblos de su estado, se condenase a sus vecinos al cumplimiento de las prestaciones dominicales, que especificó ser el pago del derecho de terrazgo, consistente en tres faenas de grano, por otras tantas de tierra sembrada, en cada año; la libre disposición de los pastos sobrantes después de aprovechados los necesarios para los vecinos; una faena de bellota por cada pechero, y media cada medio pechero, y el aprovechamiento del monte en todo lo que no hubieren menester los vecinos para la construcción de sus casas, con licencia del demandante, y para sus carros y aperos de labor con licencia del ayuntamiento, y sin poder cortar al efecto ceniza por el pie: que autorizados los ayuntamientos para contestar la demanda, siguieron el litigio hasta llegar este a recibirse a prueba, en cuyo estado, fundándose en que el pleito no lo era de pertenencia en propiedad, como habian creído al principio, y en que después de condenarse al pago era la administración la que habia que determinar este, acudieron al gobernador referido para que reclamase el conocimiento del asunto; y esta autoridad así lo verificó, añadiendo a las consideraciones anteriores la de que en lo relativo a las partes se invadía la facultad municipal de arreglar el uso y distribución de los bienes

